

Antes de entrar a analizar el texto sometido a informe es preciso señalar que, habida cuenta de la fundamentación legal del informe que inmediatamente va a evacuarse y su carácter preceptivo, a tenor de lo dispuesto en las normas que acaban de señalar, debería indicarse en la Exposición de Motivos de la norma que la misma ha sido sometida al previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos.

I

Tal y como establece la Memoria de Análisis de Impacto Normativo del Anteproyecto de Ley de digitalización y modernización del sector financiero, se busca regular principalmente cuatro ámbitos: ciberresiliencia, criptoactivos, servicios y sistemas de pago, y actualización del Sandbox regulatorio financiero nacional, con el objetivo de garantizar que el ordenamiento jurídico nacional se siga posicionando a la vanguardia en el ámbito de la legislación financiera digital por lo que: *“Por un lado, se pretende mejorar la prestación de servicios financieros para el conjunto de la ciudadanía, y mejorar las posibilidades de financiación de las empresas. Todo ello garantizando la estabilidad financiera y la protección del cliente o consumidor”*.

Tal y como señala su Exposición de Motivos, hay que destacar en primer lugar, que esta ley transpone la Directiva (UE) 2022/2556 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2022 por la que se modifican las Directivas 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 y (UE) 2016/2341 en lo relativo a la resiliencia operativa digital del sector financiero (Directiva DORA).

El Reglamento (UE) 2022/2554 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2022 sobre la resiliencia operativa digital del sector financiero y por el que se modifican los Reglamentos (CE) 1060/2009, (UE) 648/2012, (UE) 600/2014, (UE) 909/2014 y (UE) 2016/1011 (Reglamento DORA) impone obligaciones a la mayoría de las entidades financieras en materia de ciberresiliencia. La norma nacional amplía el ámbito de sujetos obligados a través del artículo 4 del Real Decreto-ley 8/2023. La Directiva DORA modifica las distintas directivas que regulan los distintos subsectores financieros con el objetivo de incluir las referencias necesarias a las obligaciones del Reglamento DORA y debe transponerse al ordenamiento jurídico nacional en las distintas normas sectoriales correspondientes.

En segundo lugar, esta ley transpone la Directiva (UE) 2023/2864 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 2023 por la que se modifican determinadas directivas en lo que respecta al establecimiento y el

funcionamiento del punto de acceso único europeo (PAUE), en relación con el cual el Reglamento (UE) 2023/2859 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 2023 por el que se establece un Punto de Acceso Único Europeo crea un repositorio de la información financiera y no financiera divulgada públicamente por las empresas.

En cuanto a su estructura, la norma proyectada consta de 21 artículos, una disposición adicional, una disposición transitoria, y dos disposiciones finales.

Por otra parte, en la descripción de la tramitación, dentro del contenido de la consulta pública previa se incluyen dos menciones a la protección de datos. La primera, en cuanto al Sandbox donde se hace referencia a una propuesta de simplificar peticiones de información de Prevención del Blanqueo y de Protección de Datos, indicándose que se realiza una valoración parcialmente positiva por lo que se recogerá en el APL la simplificación que se ha hecho para la protección de datos (declaración responsable).

En relación con el Punto de acceso único europeo (ESAP) se propone un criterio claro de la AEPD, indicándose que se realiza una valoración negativa de esta propuesta porque la norma europea ya garantiza la no vulneración de esta normativa en la publicación en el punto de acceso único.

A este respecto, la MAIN añade en el punto tres sobre análisis de cargas administrativas que la norma proyectada contribuye a la reducción de las cargas administrativas señalando que: *“Esta norma modifica la Ley 7 /2020 con el objetivo de facilitar el cumplimiento de los requisitos de protección de datos, permitiendo la presentación por parte de los promotores de una declaración responsable, y de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, habilitando un canal de comunicación específico con el SEPBLAC para la resolución de dudas en relación con el cumplimiento de la normativa”*.

II

La sentencia del Tribunal Constitucional (STC) 76/2019, de 22 de mayo, contiene la doctrina relevante de éste sobre el derecho fundamental a la protección de datos personales, y aborda tanto las características como el contenido que ha de tener la normativa que pretenda establecer una injerencia en este derecho fundamental.

*(...) Por mandato expreso de la Constitución, toda injerencia estatal en el ámbito de los derechos fundamentales y las libertades públicas ora incida directamente sobre su desarrollo (artículo 81.1 CE), ora limite o condicione su ejercicio (artículo 53.1 CE), precisa una habilitación legal (por todas, STC 49/1999, de 5 de abril, FJ 4). (...) Esta doble función de la reserva de ley se traduce en una doble exigencia: por un lado, la necesaria intervención de la ley para habilitar la injerencia; y, por otro lado, **esa norma legal «ha de reunir todas aquellas características indispensables como garantía de la seguridad jurídica»**, esto es, «ha*

de expresar todos y cada uno de los presupuestos y condiciones de la intervención» (STC 49/1999, FJ 4). En otras palabras, «no sólo excluye apoderamientos a favor de las normas reglamentarias [...], sino que también implica otras exigencias respecto al contenido de la Ley que establece tales límites» (STC 292/2000, FJ 15).

*Y ello porque, en el ámbito de las categorías especiales de datos personales, (...) el Reglamento general de protección de datos establece las garantías mínimas, comunes o generales para el tratamiento de datos personales que no son especiales. En cambio, no establece por sí mismo el régimen jurídico aplicable a los tratamientos de datos personales especiales, ni en el ámbito de los Estados miembros ni para el Derecho de la Unión. Por ende, tampoco fija las garantías que deben observar los diversos tratamientos posibles de datos sensibles, adecuadas a los riesgos de diversa probabilidad y gravedad que existan en cada caso; tratamientos y categorías especiales de datos que son, o pueden ser, muy diversos entre sí. El Reglamento se limita a contemplar la posibilidad de que el legislador de la Unión Europea o el de los Estados miembros, cada uno en su ámbito de competencias, prevean y regulen tales tratamientos, y a indicar las pautas que deben observar en su regulación. Una de esas pautas es que **el Derecho del Estado miembro establezca «medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado»** [artículo 9.2.g) RGPD] y que «se ofrezcan garantías adecuadas» (considerando 56 RGPD). **Es patente que ese establecimiento de medidas adecuadas y específicas solo puede ser expreso.** Si la norma interna que regula el tratamiento de datos personales relativos a opiniones políticas no prevé esas garantías adecuadas, sino que, todo lo más, se remite implícitamente a las garantías generales contenidas en el Reglamento general de protección de datos, no puede considerarse que haya llevado a cabo la tarea normativa que aquel le exige”.*

La misma doctrina sostiene el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Así, si el art. 8 de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales reconoce el derecho de toda persona a la protección de los datos de carácter personal que le conciernan, el art. 52.1 reconoce que ese derecho no es ilimitado y permite la limitación del ejercicio de esos derechos y libertades reconocidos por la Carta, limitación que deberá ser establecida por la ley y respetar el contenido esencial de los mismos.

La STJUE de 6 de octubre de 2020, en los casos acumulados C-511/18, C-512/18 y C-520/18, La Quadrature du Net y otros, en su apartado 175, recuerda que:

*En cuanto a la justificación de dicha injerencia, cabe precisar que el requisito, previsto en el artículo 52, apartado 1, de la Carta, de que cualquier limitación del ejercicio de los derechos fundamentales deba ser establecida por ley implica que **la base legal que la permita debe definir ella misma el alcance de la limitación** del ejercicio del derecho de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de julio de 2020, Facebook Ireland y Schrems, C 311/18, EU:C:2020:559, apartado 175 y jurisprudencia citada).*

Igualmente, el apartado 65 de la Sentencia (STJUE) de la misma fecha 6 de octubre de 2020 (C-623/17), Privacy International contra Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs y otros, con cita, como la anterior, de la sentencia Schrems 2, dice:

65 Cabe añadir que el requisito de que cualquier limitación del ejercicio de los derechos fundamentales deba ser establecida por ley implica que la base legal que permita la injerencia en dichos derechos debe definir ella misma el alcance de la limitación del ejercicio del derecho de que se trate (sentencia de 16 de julio de 2020, Facebook Ireland y Schrems, C 311/18, EU:C:2020:559, apartado 175 y jurisprudencia citada).

En definitiva, el apartado 175 de la STJUE de 16 de julio de 2020, C-311/2020, Schrems 2, dice:

Cabe añadir, sobre este último aspecto, que el requisito de que cualquier limitación del ejercicio de los derechos fundamentales deba ser establecida por ley implica que la base legal que permita la injerencia en dichos derechos debe definir ella misma el alcance de la limitación del ejercicio del derecho de que se trate [dictamen 1/15 (Acuerdo PNR UE Canadá), de 26 de julio de 2017, EU:C:2017:592, apartado 139 y jurisprudencia citada].

Es pues, la misma ley que establece la injerencia en el derecho fundamental la que ha de determinar las condiciones y garantías, esto es, el alcance y la limitación, que han de observarse en dichos tratamientos.

Y en dicha STJUE de 16 de julio de 2020, Schrems 2, se añade (y se reitera posteriormente en las citadas sentencias de 6 de octubre de 2020):

176 Finalmente, para cumplir el requisito de proporcionalidad según el cual las excepciones a la protección de los datos personales y las limitaciones de esa protección no deben exceder de lo estrictamente necesario, la normativa controvertida que conlleve la injerencia debe establecer reglas claras y precisas que regulen el alcance y la aplicación de la medida en cuestión e impongan unas exigencias mínimas, de

*modo que las personas cuyos datos se hayan transferido dispongan de garantías suficientes que permitan proteger de manera eficaz sus datos de carácter personal contra los riesgos de abuso. En particular, **dicha normativa deberá indicar en qué circunstancias y con arreglo a qué requisitos puede adoptarse una medida que contemple el tratamiento de tales datos, garantizando así que la injerencia se limite a lo estrictamente necesario.** La necesidad de disponer de tales garantías reviste especial importancia cuando los datos personales se someten a un tratamiento automatizado [véase, en este sentido, el dictamen 1/15 (Acuerdo PNR UE Canadá), de 26 de julio de 2017, EU:C:2017:592, apartados 140 y 141 y jurisprudencia citada].*

Vistas sucintamente las previsiones de la directiva a trasponer, y la doctrina de los tribunales (TC y TJUE) sobre los requisitos que han de contener las leyes que prevean injerencias en el derecho fundamental a la protección de datos cuando se tratan datos especialmente protegidos, centrándonos en el análisis de las previsiones en materia de protección de datos contenidas en el APL objeto de este informe hemos de llamar la atención sobre los siguientes preceptos:

- a) Artículo 9, Modificación de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, estableciendo el punto 3 que la letra a) del apartado 2 del artículo 50 queda redactada como sigue: “ (...) A tales efectos, el acceso a las informaciones y datos requeridos por el Banco de España se encuentra amparado por el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales».
- a) El punto 8 introduce una nueva Disposición adicional vigesimocuarta con referencia a la protección de datos en el punto 5.c) con el siguiente contenido: “5. En el caso de incumplimientos de las obligaciones o prohibiciones previstas en el Reglamento (UE) 2022/2554 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, sobre la resiliencia operativa digital del sector financiero y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1060/2009, (UE) n.º 648/2012, (UE) n.º 600/2014, (UE) n.º 909/2014 y (UE) 2016/1011 será aplicable lo dispuesto en el artículo 50 apartado 3 de la presente ley, así como, en lo no previsto en esta disposición adicional, el régimen sancionador del Título IV de dicha ley. Sin perjuicio de lo anterior, el Banco de España también podrá imponer las siguientes medidas accesorias: (...)
 - c) Requerir los registros telefónicos y de tráfico de datos que obren en poder de un operador de telecomunicaciones, cuando no haya podido obtener por otros medios la información necesaria para realizar sus labores de supervisión o inspección y conforme a la normativa nacional de protección de datos”.

- a) El artículo 18 sobre Modificación de la Ley 7/2020, de 13 de noviembre, para la transformación digital del sistema financiero, en su punto uno añade un nuevo apartado al artículo 5 que queda redactado como sigue: *“6. En ningún caso podrán acceder al espacio controlado de pruebas aquellos proyectos que no cumplan con los requisitos en materia de protección de datos y prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en los términos que se prevean a este respecto en el documento de requisitos de acceso publicado por la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional en su página web.*

Para acreditar el cumplimiento de los requisitos en materia de protección de datos, las personas o entidades promotoras deberán presentar una declaración responsable al efecto establecida en el documento de requisitos de acceso publicado por la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional en su página web. En el caso de que la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional solicite a la Agencia Española de Protección de Datos una evaluación mediante informe motivado, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 7, se podrá solicitar al promotor información adicional para acreditar el cumplimiento de los requisitos en materia de protección de datos”.

- b) Por último, el artículo 20 sobre Modificación de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, en su punto 22 modifica el apartado 3 del artículo 234 introduciendo la siguiente referencia en esta materia: *“Cuando no haya podido obtener por otros medios la información necesaria para realizar sus labores de supervisión o inspección, la CNMV podrá en los términos previstos en la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, recabar de los operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y de los prestadores de servicios de la sociedad de la información los datos que obren en su poder relativos a la comunicación electrónica o servicio de la sociedad de la información proporcionados por dichos prestadores que sean distintos a su contenido y resulten imprescindibles para el ejercicio de dichas labores.*

A tal efecto, el órgano competente de la CNMV deberá solicitar la correspondiente autorización judicial, cuando la misma implique restricción de derechos fundamentales, al Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo, que resolverá en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas”.

Vista la redacción de los preceptos ut supra transcritos, se observa que no todas las modificaciones que la norma proyectada introduce en materia de protección de datos constituyen habilitaciones legales para permitir una injerencia en este derecho fundamental, limitándose algunas de ellas a

remitirse a tratamiento de datos personales previamente habilitados por la Ley y con pleno respeto a la normativa vigente en materia de protección de datos, así sucede en el caso de las modificaciones normativas previstas en los artículos 18 y 20 del APD objeto de este informe:

- (i) el artículo 18 modifica la Ley 7/2000, de 13 de diciembre, con el fin de contribuir a la reducción de cargas administrativas, y con el objetivo de facilitar el cumplimiento de los requisitos de protección de datos se permite la presentación por parte de los promotores de una declaración responsable, sin perjuicio de poder solicitarse información adicional para acreditar el cumplimiento de los requisitos en materia de protección de datos, por lo que no se aprecia el establecimiento *ex novo* de una injerencia en este derecho fundamental.
- (ii) la modificación que realiza el artículo 20 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, habilita a la CNMV en los términos previstos en la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, a recabar de los operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y de los prestadores de servicios de la sociedad de la información los datos que obren en su poder relativos a la comunicación electrónica o servicio de la sociedad de la información proporcionados por dichos prestadores que sean distintos a su contenido y resulten imprescindibles para el ejercicio de dichas labores, por lo que no se aprecia el establecimiento *ex novo* de una injerencia en este derecho fundamental.

III

Ahora bien, no sucede lo mismo con las modificaciones previstas en el artículo 9 del APD que se examina:

- (iii) el artículo 9, introduce una serie de modificaciones en la Ley 10/2024, de 26 de junio, de ordenación, supervisión, y solvencia de entidades de crédito. En su punto 3 está prevista la modificación de la letra a) del apartado 2 del artículo 50 con la siguiente redacción (el subrayado es nuestro):

“a) Recabar de las entidades y personas sujetas a su función supervisora, y a terceros a los que dichas entidades hayan subcontratado actividades o funciones incluidos los proveedores terceros de servicios de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a que se refiere el capítulo V del Reglamento (UE) 2022/2554 del Parlamento Europeo y del Consejo, la información necesaria para comprobar el cumplimiento de la normativa de ordenación y disciplina.

Con el fin de que el Banco de España pueda obtener dichas informaciones, o confirmar su veracidad, las entidades y personas

mencionadas quedan obligadas a poner a disposición del Banco de España cuantos libros, registros y documentos considere precisos, incluidos los programas informáticos, ficheros y bases de datos, sea cual sea su soporte físico o virtual.

A tales efectos, el acceso a las informaciones y datos requeridos por el Banco de España se encuentra amparado por el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales».

- (iv) Asimismo, el ya citado artículo 9, en su punto 8, habilita al Banco de España para adoptar medidas accesorias, entre las que destaca la consistente en requerir registros telefónicos y de tráfico de datos obrante en poder de un operador de telecomunicaciones, conforme a la normativa nacional en materia de protección de datos.

Como hemos tenido ocasión de analizar más arriba la jurisprudencia del TC y del TJUE puede resumirse en el sentido de establecer que **la normativa que apruebe una injerencia sobre el derecho fundamental a la protección de datos susceptible de afectar al tratamiento de datos personales especialmente protegidos debe indicar en qué circunstancias y con arreglo a qué requisitos puede adoptarse una medida que contemple el tratamiento de tales datos, garantizando así que la injerencia se limite a lo estrictamente necesario.**

Sin situarnos en el escenario de las específicas restricciones que se requieren en el caso del tratamiento de datos de protección especial por no parecer que las habilitaciones que ahora se examinan alcancen a tales datos (las cuales habrían de tenerse en todo caso en consideración si tal fuera el escenario aplicable a las habilitaciones que se quieren regular), centrándonos como decimos en la regulación de habilitaciones para el tratamiento de datos personales (no especialmente protegidos), lo primero que debemos destacar es que el tratamiento previsto en el punto 3 del artículo 9 de manera muy similar se encuentra a día de hoy previsto en el actual artículo 50.2.a) de la Ley 10/2014, disponiendo que: “el acceso a las informaciones y datos requeridos por el Banco de España se encuentra amparado por el artículo 11.2.a) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal”, previsión que como hemos visto se sustituiría ahora por la remisión al actualmente vigente artículo 8 de la Ley Orgánica; precepto que, no obstante, se centra básicamente en establecer la necesidad de que sea una norma de rango de ley la que autorice el tratamiento de datos personales con base en las letras c) y e) del artículo 6 de dicho cuerpo normativo.

El contenido mínimo recomendable de este tipo de habilitaciones legales se encuentra regulado en el artículo 6.3 del RGPD, en el que se dispone que (el subrayado y negrita es nuestro):

“La base del tratamiento indicado en el apartado 1, letras c) y e), deberá ser establecida por:

- a) el Derecho de la Unión, o
- b) el Derecho de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento.

La finalidad del tratamiento deberá quedar determinada en dicha base jurídica o, en lo relativo al tratamiento a que se refiere el apartado 1, letra e), será necesaria para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

Dicha base jurídica **podrá contener disposiciones específicas** para adaptar la aplicación de normas del presente Reglamento, entre otras: las condiciones generales que rigen la licitud del tratamiento por parte del responsable; los tipos de datos objeto de tratamiento; los interesados afectados; las entidades a las que se pueden comunicar datos personales y los fines de tal comunicación; la limitación de la finalidad; los plazos de conservación de los datos, así como las operaciones y los procedimientos del tratamiento, incluidas las medidas para garantizar un tratamiento lícito y equitativo, como las relativas a otras situaciones específicas

de tratamiento a tenor del capítulo IX. El Derecho de la Unión o de los Estados miembros cumplirá un objetivo de interés público y será proporcional al fin legítimo perseguido”.

Por lo tanto, la mera remisión prevista en el punto 3 del artículo 9 a que el acceso a tales informaciones y datos por parte del Banco de España se encuentra amparado por el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, limitándose a concretar la finalidad de los tratamientos habilitados (*comprobar el cumplimiento de la normativa de ordenación y disciplina*), **satisface los requisitos mínimos exigibles previstos en el artículo 6.3 RGPD para establecer una base de tratamiento**. Ahora bien, como hemos visto ut supra el citado artículo 6.3 establece con carácter potestativo el contenido que habrán de tener las leyes que establezcan habilitaciones para el tratamiento de datos personales para que pueda entenderse completamente garantizado que la injerencia es proporcionada y se limita a lo mínimo e indispensable. La ausencia de regulación de tales limitaciones y concreciones en materia de finalidad, plazo de conservación, operaciones de procedimientos del tratamiento, etc, sin llegar a suponer un incumplimiento del RGPD, por tener carácter potestativo y por no estar, como se ha indicado previamente, ante supuestos de tratamientos de datos especialmente protegidos, sin llegar a suponer una vulneración del Reglamento, sí implica que no se cubran todos los aspectos previstos por dicho cuerpo legal para entender garantizado que, en efecto, la injerencia se limite a lo estrictamente necesario.

Y lo mismo hemos de decir respecto a la previsión del punto 8 del citado artículo 9 por la que se habilita al Banco de España a adoptar *medidas accesorias consistentes en requerir registros telefónicos y de tráfico conforme a la normativa nacional de protección de datos*.

Por otra parte, la documentación enviada con carácter complementario consistente en el proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla el capítulo II del título I de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los mercados de valores y de los servicios de inversión, en lo que respecta a la utilización de sistemas basados en tecnología de registros distribuidos, así como el proyecto de Real Decreto de digitalización y modernización del sector financiero, por el que se desarrolla el APL objeto de este informe, no resulta hábil para realizar nuestro examen de privacidad. En primer lugar por tratarse de meros proyectos normativos, de los que se desconoce el estado de tramitación en que se encuentran y cuyo análisis de privacidad, en todo caso, deberá realizarse cuando con arreglo al correspondiente procedimiento de tramitación normativo se solicite su propio análisis de privacidad. En segundo lugar, por tratarse de normas de rango jerárquico inferior a la ley, a las que nuestra jurisprudencia no permite remitir la regulación de las circunstancias y limitaciones que permitan garantizar que la injerencia en este derecho fundamental es proporcional y reducida a lo mínimo e indispensable para el fin perseguido, STJUE de 16 de julio de 2020, Schrems 2), y STC 76/2019:

*“(…) La cuestión solo puede tener una respuesta constitucional. **La previsión de las garantías adecuadas no puede deferirse a un momento posterior a la regulación legal del tratamiento de datos personales** de que se trate. **Las garantías adecuadas deben estar incorporadas a la propia regulación legal del tratamiento**, ya sea directamente o por remisión expresa y perfectamente delimitada a fuentes externas que posean el rango normativo adecuado. Solo ese entendimiento es compatible con la doble exigencia que dimana del artículo 53.1 CE para el legislador de los derechos fundamentales: la reserva de ley para la regulación del ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos en el capítulo segundo del título primero de la Constitución y el respeto del contenido esencial de dichos derechos fundamentales.*

*Según reiterada doctrina constitucional, la reserva de ley no se limita a exigir que una ley habilite la medida restrictiva de derechos fundamentales, sino que también es preciso, conforme tanto a exigencias denominadas –unas veces– de predeterminación normativa y –otras– de **calidad de la ley** como al respeto al contenido esencial del derecho, que en esa regulación el legislador, que viene obligado de forma primaria a ponderar los derechos o intereses en pugna, predetermine los supuestos, las condiciones y las garantías en que procede la adopción de medidas restrictivas de derechos fundamentales. Ese mandato de predeterminación respecto de elementos esenciales, vinculados también en último término al juicio de proporcionalidad de la limitación del derecho fundamental, **no puede quedar deferido a un ulterior desarrollo legal o reglamentario, ni tampoco se puede dejar en manos de los propios particulares.***

En definitiva, sin perjuicio de hacerse notar que la redacción actual del artículo 50.2.a) de la Ley 10/2014, contempla a día de hoy la habilitación del

Banco de España para *recabar de las entidades y personas sujetas a su función supervisora la información necesaria para comprobar el cumplimiento de la normativa de ordenación y disciplina, así como la remisión al amparo de estas previsiones en el artículo 11.2.a) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal*, este Servicio Jurídico debe hacer notar que las previsiones recogidas en los dos puntos analizados del proyectado artículo 9 habilitan injerencias en este derecho fundamental por parte del Banco de España que cumplen con las exigencias mínimas previstas en el RGPD para establecer bases legales de tratamiento de datos personales no especiales, si bien se aprecia ausencia de regulación de las limitaciones y concreciones previstas con carácter complementario o potestativo para garantizar la proporcionalidad y limitación al fin perseguido por tales tratamientos.